

Continuidades que alarman Estado y represión en Argentina: del gobierno de la Alianza a los inicios del macrismo (2000-2016)

Continuities that alarm

State and repression in Argentina: from the government of the Alianza to the beginnings of Mauricio Macri (2000-2016)

Eduardo Sartelli / Fabián Harari

Este artículo tiene como fin examinar las formas de reconstrucción de la autoridad estatal en la acumulación de poder político que presenta la democracia en Argentina, durante y después de la crisis orgánica de 2001, hasta el primer año del gobierno del partido Propuesta Republicana (PRO) (2016). Para ello, toma una variable particularmente significativa como es el uso de la fuerza estatal contra diferentes formas de protesta de la población, así como el surgimiento y uso de grupos paraestatales que cumplen funciones represivas. Se examina, en ese sentido, el despliegue en el tiempo y en el espacio. Los resultados muestran una tendencia a la mayor acción represiva del Estado, cualquiera sea el signo de su administración. En segundo, la creciente actividad de grupos organizados para la coacción por fuera de los marcos legales.

Palabras clave: Argentina, Estado-coacción, protesta social.

This article aims to examine the forms of reconstruction of the state authority in the accumulation of political power that presents the democracy in Argentina, during and after the organic crisis of 2001, until the first year of the government of the Republican Proposal party (PRO) (2016). For this, it takes a particularly significant variable such as the use of state force against different forms of protest by the population, as well as the emergence and use of parastatal groups that fulfill repressive functions. The deployment in time and space is examined in that sense. The results show a trend towards greater repressive action by the State, whatever the sign of its administration. Second, the growing activity of groups organized for coercion outside of legal frameworks.

Key words: Argentina, State-coercion, social protest.

Fecha de recepción: 29/01/2018

Fecha del dictamen: 04/05/2018

Fecha de aprobación: 10/05/2018

INTRODUCCIÓN

La transición que se está llevando a cabo en América Latina, donde gobiernos llamados “populistas”, “progresistas”, “nacionales y populares” o “neodesarrollistas” son reemplazados por aquellos calificados como “neoliberales”, “republicanos”, “conservadores” o simplemente de “derecha”, ha sido considerada, en muchos trabajos, la expresión de una ruptura en el modo de administrar el Estado y su relación con las clases sociales. De idéntica forma, la instauración de los primeros fue entendida con una ruptura con el anterior modelo neoliberal de la década de 1990, conformando una secuencia final que podría describirse como neoliberalismo-populismo-neoliberalismo.

En Argentina, Venezuela y Bolivia, la aparición de gobiernos considerados fundacionales, y que realizaron concesiones a la clase obrera, en la última década (Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez y Evo Morales) estuvo precedida por una crisis orgánica y una incipiente descomposición del Estado. Mientras en Venezuela y Bolivia (con sus grandes diferencias) esos regímenes aún se mantienen en pie, en Argentina el gobierno fue desplazado en las urnas por una nueva coalición. Por lo tanto, el caso constituye un objeto privilegiado a la hora de discutir las rupturas y continuidades, durante los tres gobiernos, ya sea en torno a la crisis en el Estado, en las formas de las determinaciones del poder político y en los problemas de la democracia liberal.

En este artículo tomamos un aspecto realmente significativo de ese conjunto de problemas, como es la relación del Estado con la clase obrera. Como esa relación tiene múltiples componentes y manifestaciones (económicas, políticas, sindicales), elegimos una en particular: la acción represiva del Estado sobre la movilización de los trabajadores. Este recorte nos permite, en primer lugar, abordar un aspecto de la crisis del Estado y su capacidad de moderar sus dosis de coacción, en favor del consenso. En segundo, comprender la evolución de una de las formas de acumular y sostener el poder político. Por último, los problemas que afronta la democracia a la hora de dar respuesta a las demandas de los explotados. El examen de la evolución de la represión podrá acercar un elemento significativo al balance de las rupturas y continuidades, tanto del gobierno de los Kirchner (2003-2015), como del PRO (desde 2016), a partir de una variable ciertamente sensible, como es el uso de la fuerza contra la población que se manifiesta.

LOS DEBATES EN TORNO A LA DÉCADA KIRCHNERISTA

Las visiones sobre las características de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y los problemas políticos que afronta la Argentina, oscilan entre tres grandes líneas: la corriente liberal, la que se liga a la democracia social, al

nacionalismo popular y a la teoría de la dependencia y, por último, la que aparece ligada (de forma más ajustada o más laxa) al marxismo. Claramente, el primer enfoque y el último son más bien críticos de esa experiencia (aunque por razones opuestas), mientras que el segundo tiende a reivindicar gran parte de sus aspectos.

Comencemos entonces por los trabajos que analizan los problemas clásicos planteados por la escuela liberal: la ciudadanía, el sistema republicano y la división de poderes. De esta forma, establecen una diferenciación entre democracia (origen del poder) y república (su regulación) (Botana, 2006). Sobre este enfoque, aparecen explicaciones en torno a una “voluntad” que no habría tenido en cuenta los límites de la economía y la política de la Argentina (Novaro, Bonvecchi, Cherny, 2014). Estos autores sostienen que el Estado ha tenido una actitud más bien permisiva con la protesta social, en la decisión de no reprimirla y no imponer su autoridad, perjudicando con ello la reconstrucción de una ciudadanía responsable, luego del estallido de 2001, y del imperio de la ley.¹

Las investigaciones que priorizan los avances de los gobiernos de la última década se inscriben en una mirada nacionalista popular, la teoría de la dependencia y el keynesianismo en lo económico. Éstos basan sus investigaciones en los postulados de Ernesto Laclau (2005), quien proponía que el populismo surge en escenarios donde múltiples reclamos insatisfechos de varios colectivos dispersos son aglutinados por un líder, quien unifica a los sujetos portadores de este reclamo conformándolos como “pueblo”.

Los estudios que se mantienen en esta corriente, pero que priorizan el análisis de las relaciones políticas, tienden a sostener la existencia en la Argentina reciente de dos alianzas sociales, claramente delimitadas. Por un lado, el proyecto conservador y neoliberal (en algunos casos, se agrega “antidemocrático”), cuya expresión habrían sido los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001) y el actual de Mauricio Macri (2016-) (Pucciarelli y Castellani, 2017). La dirección de este conglomerado recae en la oligarquía financiera y en el capital trasnacional. En oposición a ésta, se levantaría una alianza nacional, popular y democrática, compuesta por la clase obrera, la “clase media” y los pequeños y medianos empresarios. Habría tenido como objetivo la creación de un “capitalismo con inclusión”, frente al “excluyente” del

¹ “En sintonía con el discurso y las posiciones de las organizaciones de derechos humanos que venían criticando desde la década anterior el tratamiento del conflicto social por parte del Estado, el gobierno dejó establecida su decisión de no reprimir la protesta social” (Novaro, Bonvecchi y Cherny, 2014:134).

modelo neoliberal, y la reparación de demandas políticas (renovación, participación), económicas (gasto social, crecimiento del empleo) y simbólicas (derechos humanos, juicios a los militares responsables de la última dictadura) (Cotarelo, 2016). Con respecto a la acción represiva del Estado, los trabajos tienden a señalar su carácter aislado y focalizado. En los casos de asesinatos por fuerzas paraestatales, explican que éstas no tienen relación sistemática con el gobierno, si bien pudieron haber tenido algún vínculo ocasional (Carrera y Cotarelo, 2003).

La escuela liberal procede sobre un enfoque demasiado parcial y formal: las instituciones. La sociedad, sus contradicciones y los diferentes intereses, no parecen tener lugar en el análisis. La corriente dependientista parece no poder identificar ciertas continuidades. En ese sentido, en otros estudios hemos trabajado con el concepto clásico de bonapartismo (Marx, 1851; Sartelli, 2007), que implica un régimen político (y no meramente un gobierno), asentado en el equilibrio entre las clases antagónicas, producto de una crisis política importante. Por eso, nuestro trabajo, que parte de otras premisas, se aboca a verificar o problematizar tal consenso y, por lo tanto, abrir un campo de trabajo hasta el momento no contemplado.

METODOLOGÍA

En términos generales, nuestro objetivo es reconstruir la represión estatal y paraestatal contra la clase obrera, desde el gobierno de la Alianza (1999-2001), hasta el de Cambiemos (2016-). Sin embargo, este concepto tan amplio de “represión” requiere de una mayor precisión.

El término puede ser muy vasto, ya que abarca diferentes mecanismos que adquiere la dominación, desde los más materiales hasta los más simbólicos. También, a los diversos agentes y formas, desde las legales a las informales. Aquí, nos proponemos examinar la represión en tanto coacción física directa, organizada por el Estado o por agentes irregulares del mismo. Es decir, dejamos de lado acciones espontáneas o individuales. Tampoco nos referimos simplemente como “de la burguesía” a secas, porque ahí entraría cualquier tipo de violencia de tipo privada (el mundo de la delincuencia, narcotráfico y la rivalidad entre aparatos políticos burgueses). Cuando nos referimos al Estado, damos por supuesto que se trata de un aparato de la clase dominante.

Vamos a estudiar la represión del Estado, así definida, en dos de sus formas: la que utiliza fuerzas regulares y la paraestatal. La primera es la que recurre a las organizaciones que contempla la legislación y tienen una formación permanente: Ejército, Gendar-

mería, Prefectura y diferentes policías provinciales y federales. La segunda es la que suele denominarse, en el léxico argentino, “patotas” e incluye la formación de grupos reclutados en espacios estatales (miembros de las fuerzas represivas), sindicales y/o ilegales (delincuencia). Los llamamos “paraestatales”, porque sin tener una vinculación formal y legal con el Estado, operan directa o indirectamente bajo el mando de elementos vinculados con el personal que administra el poder político y su acción complementa a la represión formal. Es decir, no se trata de una acción contra el Estado, ni completamente desconocida por éste, sino que opera en forma paralela, de ahí el término “paraestatal”.

En tanto nos referimos a la violencia física directa, dejamos de lado todo tipo de hostigamiento jurídico, como procesamientos o condenas sobre diferentes dirigentes sindicales o políticos.

Procuramos ahora delimitar al objeto de esa violencia física directa organizada. Lo que buscamos no es la represión contra cualquier miembro del proletariado, sino contra su acción colectiva, ya sea inmediatas de acción directa (manifestaciones, cortes de calle o ruta, acampes, huelgas) o más mediadas (amedrentamiento a dirigentes o locales sindicales, barriales o políticos).

El análisis de las variables que proponemos no agota el conjunto de elementos necesarios para caracterizar con precisión a los cuatro signos políticos que gobernaron (Alianza, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y Mauricio Macri). Simplemente, permite evaluar los elementos de continuidad con sus predecesores, la representación de los intereses de determinada clase social y el enfrentamiento con la clase obrera.

Lo que vamos a medir, entonces, es el peso de esa violencia física estatal sobre la acción colectiva de la clase obrera. Cuando decimos “peso”, nos referimos a una fuerza que ejerce un cuerpo determinado (en este caso, la burguesía por medio del Estado). Esa fuerza puede medirse por su volumen (despliegue en el espacio), su frecuencia (repetición en el tiempo) y su intensidad (cantidad concentrada). El objetivo primordial, entonces, es una reconstrucción cuantitativa del fenómeno. Entonces, identificamos los hechos y su despliegue en el tiempo y el espacio nacional. Luego medimos su frecuencia, avanzando hacia una definición de su grado de sistematicidad y su aceleración o ralentización. En este artículo, y por razones de espacio, sólo presentamos y analizamos las acciones totales distribuidas en el tiempo y espacio, su intensidad, el objetivo primordial (qué fracción es más reprimida) y la composición interna de esa coacción (comparación entre la estatal y la paraestatal). Durante la exposición nos concentramos en la discusión de lo que arrojan los datos, para no dispersar la atención. Luego, en las conclusiones, retomamos el hilo más teórico para examinar las implicancias de esa nueva información en los debates sobre

la crisis política, las diferencias entre el kirchnerismo y el gobierno actual y, sobre todo, las características de la democracia en Argentina.

Las fuentes que utilizamos son los periódicos nacionales y provinciales, las prensas y páginas web de diferentes organizaciones políticas (predominantemente, de izquierda), espacios de denuncias (como Indymedia), archivos sobre represión –como el de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) o el del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Por último, para cotejar y ampliar nuestro conocimiento, entrevistamos a militantes sindicales o políticos (en algunos casos pidieron anonimato), a quienes estamos profundamente agradecidos. En todos los casos, cruzamos los datos.

Debemos aclarar que siempre que hablemos de cifras, estaremos trabajando sobre un mínimo, ya que el universo de represión estatal, y sobre todo paraestatal, no ha sido documentado ni denunciado en su totalidad. Entre el intento de silencio oficial y el temor de las víctimas, no siempre pueden reconstruirse todos los casos a lo largo del extenso país. No obstante, ese esfuerzo de documentación es constante a lo largo de toda la serie. Con lo cual podemos afirmar que trabajamos con datos representativos, tanto de la envergadura del problema como de la tendencia.

LA REPRESIÓN EN NÚMEROS

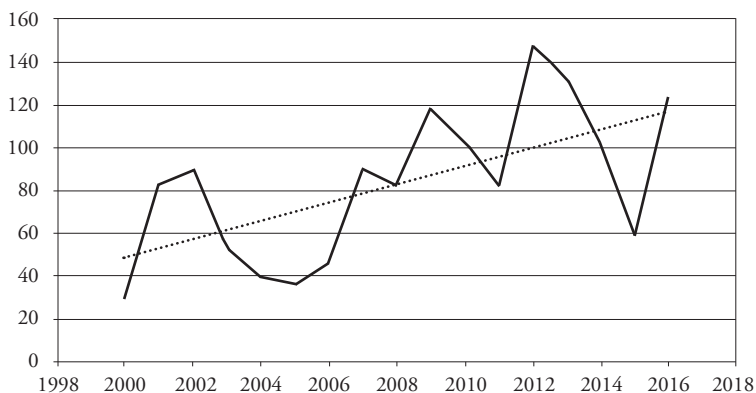
En total, registramos un mínimo de 1 415 intervenciones represivas, con un promedio de 83.2 por año.² Si sólo tomamos los años kirchneristas tenemos, en cambio, 1 091 acciones represivas, con un promedio de 83.9, lo que indica que bajo estos gobiernos no disminuyó la tendencia represiva e incluso la eleva, aunque en una magnitud pequeña. Claro que, en 14 años de gobierno, este promedio no dice, por el momento, sobre la evolución de la variable.

Vamos a examinar, por lo tanto, esa evolución en todo el periodo, desde De la Rúa hasta el primer año de Mauricio Macri. Como explicamos, sumamos todas las acciones. El resultado es la Gráfica 1.

Lo primero que podemos apreciar en esta gráfica es una tendencia a la represión creciente. La acción represiva va en un aumento constante, independientemente de los gobiernos en turno y de sus construcciones discursivas. Es decir, cada vez hacen falta mayores dosis de represión, y no menos, para sostener el orden político.

² Decimos mínimo porque el conjunto del universo de acciones represivas no siempre está documentado.

GRÁFICA 1
Acciones represivas totales (2000-2016)



Fuente: elaboración a partir de periódicos nacionales, provinciales y partidarios.

Pero también observamos que esa tendencia no es lineal, sino que sufre recaídas. Podemos ver dos ciclos ascendentes. Uno en 2000-2002, que lógicamente tiene que ver con la represión necesaria frente al ciclo que desemboca en la insurrección de diciembre 2001 y su continuidad durante la primera mitad de 2002. En este periodo se dan ciertos hitos represivos como el despliegue de fuerzas en Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001 y en Puente Pueyrredón, en junio de 2002. El primero dirigido por el gobierno de De la Rúa y el segundo por el de Eduardo Duhalde.

Otro en 2008-2013, que se relaciona con la crisis en la que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entra en 2008 y de la que no logra reponerse. Ahí tenemos, también, ciertos hitos como la represión ante las tomas del Parque Indoamericano (diciembre de 2010) y las grandes represiones en los saqueos de diciembre de 2012 y 2013. Por último, en 2016, con el gobierno de Mauricio Macri, la tendencia vuelve a recuperarse. No sabemos si para sostenerse o incrementarse, pero a raíz de los sucesos de fin de 2017, podemos suponer lo segundo.³

Los momentos de descenso son los periodos 2003-2007 y 2013-2015. El primero, luego de la normalización política y la “primavera kirchnerista”, dada por la política de

³ Nos referimos a la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, en circunstancias de protesta social.

derechos humanos y la holgada situación económica, merced a los superávits paralelos. El segundo, luego de una fuerte avanzada en los años de crisis.⁴ De todos modos, hay que hacer notar que los descensos no vuelven nunca al piso anterior, sino que se mantienen por encima, lo que constituye una tendencia al ascenso secular. A su vez, el segundo declive no sólo está en un nivel mayor al primero, sino que es más breve. Por ejemplo, la represión a los trabajadores de Parmalat, entre enero y junio de 2005, a la huelga del Hospital Francés (marzo 2006) y a los trabajadores del Casino (mayo 2007).

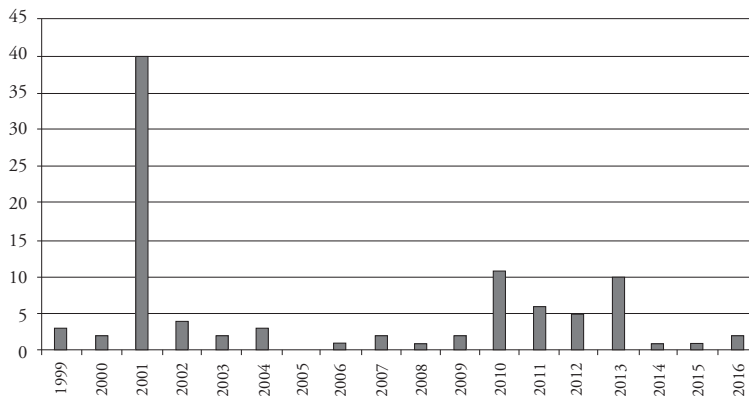
Con todo, lo que vemos es simplemente un número de acciones, que nos señalan la cantidad de veces que se usa la fuerza contra la clase obrera organizada, pero nada nos dice de la intensidad. Por lo tanto, un análisis más exhaustivo debería contemplar también la profundidad. Esto puede verse, fundamentalmente, con una reconstrucción de la cantidad de asesinatos. Es decir, cuando se usa la fuerza en grado extremo. Siempre recordemos que estamos ante enfrentamientos colectivos y, por lo tanto, el margen de “exceso” siempre es menor a cualquier asesinato policial de algún obrero, llamado en Argentina “gatillo fácil” (Correpi).

En la Gráfica 2 vemos un ascenso en el ciclo del Argentinazo (diciembre 2001), un declive en los años de Néstor Kirchner y un aumento entre el primero y el segundo periodo de Cristina. Hay una serie de diferencias con respecto al gráfico anterior. Primero, aquí la intensidad mayor aparece en el 2001 y desciende en 2002, cuando se muestra un comportamiento inverso. Segundo, mientras que ahí el segundo ascenso comienza en 2008, aquí comienza en 2010. Tercero, mientras en la gráfica anterior el 2016 muestra un ascenso, aquí la tendencia se mantiene.

Una explicación posible es que en 2001, particularmente en diciembre, se da un enfrentamiento abierto que requiere una rápida y fulminante acción estatal. Recordemos que sólo el 20 de diciembre, el Estado asesina a 30 personas en los alrededores de Plaza de Mayo para detener una movilización insurreccional. En 2002, esa acción fulminante (Puente Pueyrredón, junio de 2002) da como resultado una crisis política,

⁴ A partir de 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entra en una crisis política y económica, lo que le vale un progresivo enfrentamiento con sectores empresariales y obreros. En el primer caso, una rebelión fiscal de las corporaciones agrarias, ese mismo año, que dura cuatro meses y, durante el último mandato, la falta de apoyo de los industriales. En el segundo, la ruptura, en 2011, con una parte importante del sindicalismo, lo que le vale cinco paros generales en cuatro años. Además, durante dos veranos consecutivos (2012 y 2013), el país asiste a una ola de saqueos a los supermercados, protagonizados por las fracciones más carenciadas de la clase obrera, producto de la crisis económica. El resultado son dos derrotas electorales, en 2009 y 2013, además de la de 2015 (véase Novaro, Bonvecchi y Cherny, 2014).

GRÁFICA 2
*Cantidad de muertos en conflictos sociales,
 por fuerzas estatales o paraestatales por año (1999-2016)*



Fuente: elaboración a partir de periódicos nacionales, provinciales y partidarios.

por lo que se acude al cambio en cantidad. Con respecto al segundo ascenso, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, podemos suponer que un ascenso cuantitativo suele preceder al cualitativo (lo mismo vemos en 2001, precedido por el aumento en el 2000). Sólo luego de una insistente represión, y ante la poca eficiencia de la misma, se recurre a una profundización de las medidas. También se debe remarcar que la mayor cantidad de asesinatos se concentran en episodios de crisis sociales, en los que intervienen masas, particularmente saqueos (2001, 2012, 2013).

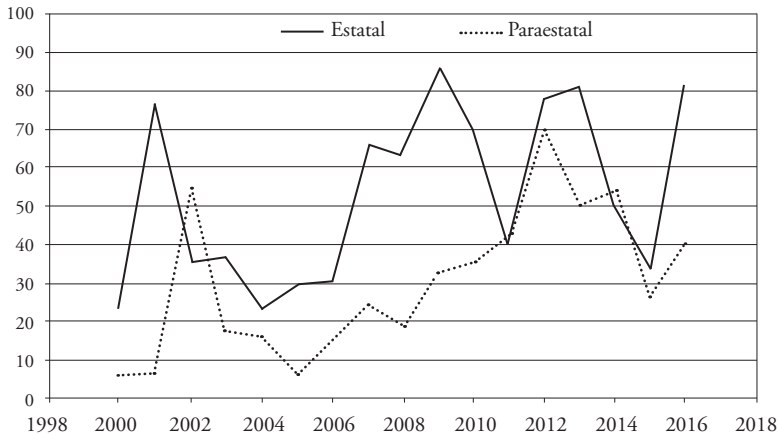
Bajo el kirchnerismo, la menor intensidad no merma la acción estatal con resultado de muerte de manifestantes. En octubre de 2003, grupos oficialistas asesinaron a dos militantes de la Corriente Clasista y Combativa, en Jujuy. En 2004, al “Oso” Cisneros. El 18 de septiembre de 2006, fuerzas parapoliciales secuestraron a Julio López, testigo en una causa contra el ex comisario Etchecolaz, por crímenes de la última dictadura. López continúa desaparecido. En abril de 2007, las fuerzas policiales de la provincia de Neuquén asesinaron al docente Carlos Fuentealba, quien participaba de un corte de ruta.⁵ Estas son algunas de las represiones más emblemáticas del periodo, aunque

⁵ Con el agravante de que el gobernador de esa provincia se declaró responsable, pero no sólo no fue juzgado, ni su provincia intervenida por el gobierno central, sino que incluso tuvo la oportunidad de presentarse como candidato presidencial ese mismo año.

claramente no las únicas.⁶ También están las tres muertes en la represión de la toma del Indoamericano en 2010, las de Sergio Cárdenas y Facundo Carrasco en Bariloche, en junio de ese mismo año.

Ahora bien, la reconstrucción del despliegue en el tiempo requiere examinar una variable más: la evolución comparada de la represión estatal y paraestatal. Suele argumentarse que la segunda es producto de una “tercerización” de la represión, debido a que las muertes de manifestantes, bajo los gobiernos de De la Rúa y Eduardo Duhalde, habrían mermado la capacidad de las fuerzas regulares de actuar. Por lo tanto, se apelaría a estas bandas como reemplazo de las primeras. Veamos, entonces, lo que nos dicen los datos.

GRÁFICA 3
Acciones represivas estatales y paraestatales (2000-2016)



Fuente: elaboración a partir de periódicos nacionales, provinciales y partidarios.

Observamos que ambas líneas mantienen la misma tendencia que la evolución general y la de los asesinatos, con algunos matices. Mientras la línea de las acciones estatales sube abruptamente, en 2007, la de acciones paraestatales tiene más bien un ascenso suave desde el 2005 hasta el 2011, para comenzar un declive, también suavemente. Pero ambos siguen la tendencia general.

⁶ Relatar cada una de las represiones nos llevaría un espacio mucho más grande del que podríamos utilizar.

Con respecto a la tesis de la “tercerización”, podemos ver que la represión estatal no sólo no disminuye en todo el periodo, sino que aumenta sustancialmente y siempre es mayor a la paraestatal. Incluso la tendencia es a aumentar la brecha. Sólo encontramos dos años puntuales en donde la relación se revierte (2002 y 2014). Por lo tanto, la represión paraestatal no reemplaza, sino que complementa la estatal. Es decir, acompaña la escalada represiva general, operando en aquellas ocasiones donde la estatal es menos eficiente. Lo interesante, y preocupante, es observar que para el 2010 la cantidad de represión excede la de 2001 y, salvo un descenso temporal, se mantiene en esos niveles. Un episodio de gran repercusión de estas llamadas “patotas” fue el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, en una movilización de ferroviarios. La manifestación fue emboscada por un grupo de choque armado por la dirección sindical de la Unión Ferroviaria y el Ministerio de Trabajo. Participaron ahí miembros de la barrabrava de Racing y Defensa y Justicia.⁷

Es en el 2002 cuando podría llegar a aplicarse la hipótesis de la “tercerización”. La cantidad de represión es muy alta y, en su mayor medida, en forma irregular. Vimos que se utilizó, principalmente, para mantener el orden en el conurbano bonaerense en forma muy precisa y, podríamos decir, “quirúrgica”. Los hechos de Puente Pueyrredón no sólo derivaron en la entrega de miles de planes sociales y la renuncia del presidente, sino en un descenso de los enfrentamientos directos. Pero no de la acción represiva necesaria para asegurar la estabilidad del régimen. Es en ese marco que las patotas asociadas principalmente con el Partido Justicialista (PJ) entran en acción.

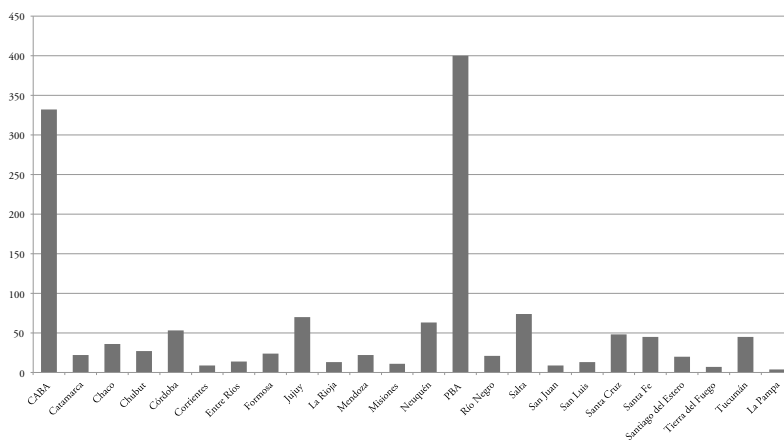
A continuación observamos la distribución de las acciones represivas totales por provincia, con el fin de comprender cuáles son aquellas donde la acción se despliega en mayores dosis. En todos los casos, apelamos a la supresión de decimales.

Lo primero que debemos señalar es que la represión se distribuye en todo el espacio nacional, en todo este tiempo. Si bien en forma desigual, en todas las provincias asistimos a acciones represivas, aun en las menos conflictivas.

En este escenario, la mayor cantidad de acciones se concentran en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Entre las dos, concentran 53% de las acciones. Es evidente que estamos ante la acción estatal en el corazón del capitalismo argentino y la residencia principal de la clase obrera. En el caso de la provincia, se trata del espacio de gran conflictividad latente y mayor necesidad de control. Quien controla la provincia, y especialmente el conurbano, tiene la llave de la política nacional. En ese sentido, no es extraño que todos los esfuerzos se concentren

⁷ Para una revisión del caso, véanse Zorzoli (2014) y Zicolillo (2013).

GRÁFICA 4
Distribución de las acciones por provincia (2000-2016)



Fuente: elaboración a partir de periódicos nacionales, provinciales y partidarios.

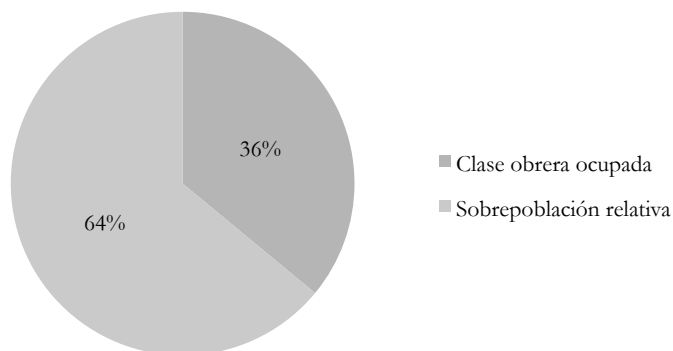
ahí. En el caso de la CABA, a esos elementos que están presentes pero en menor medida, se agrega que es el centro político. Por lo tanto, los episodios de represión también incluyen acciones sobre movilizaciones hacia el centro del poder.

Le siguen las provincias de Jujuy, Salta y Neuquén, con 5% cada una. Se trata de provincias con un gran componente de sobrepoblación relativa, problemas sociales de larga data y una tradición de lucha muy importante. Más atrás vienen provincias como Córdoba (4%), Santa Cruz (3%) y Santa Fe (3%). Se trata de provincias con gran composición obrera y, en el caso de Santa Cruz, con gran tradición de lucha, que continuó bajo el kirchnerismo. Sin embargo, si bien en el último caso hay acciones muy puntuales y recordadas, no llegan al nivel de represión de las tres primeras. Recordemos que se trata de acciones represivas y no necesariamente tienen un correlato directo con el grado de conflictividad social, aunque sí dan alguna evidencia sobre el mismo. Esta distribución tiene, ciertamente, una sobrerrepresentación de la CABA en la medida en que en 2001 y 2002 las acciones se concentran demasiado en el centro del poder.

Vimos, hasta ahora, el despliegue de la represión en el tiempo y en el espacio nacional. Trataremos de responder a qué fracciones se reprime más.⁸ O, mejor dicho, cuáles sufrieron mayor cantidad de intervenciones estatales y paraestatales.

⁸ Esta clasificación requiere explicar la distinción entre la clase obrera ocupada y la sobrepoblación relativa (población que le sobra al capital). Si bien sobre el problema hay una serie de debates,

GRÁFICA 5
Fracción obrera reprimida en acciones totales (2000-2016)



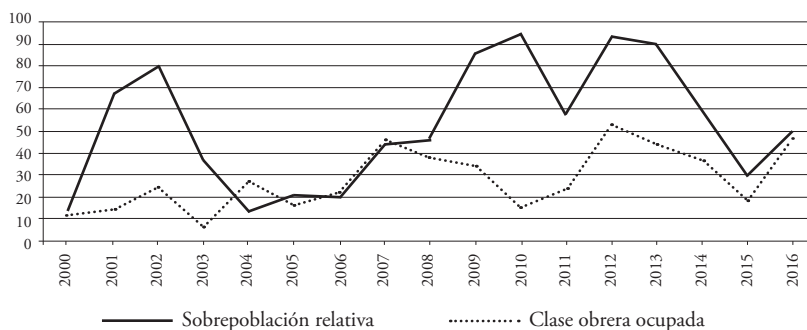
Fuente: elaboración a partir de periódicos nacionales, provinciales y partidarios.

Si sólo tomamos el periodo kirchnerista, las cifras son prácticamente idénticas (64.5% contra 35.5%). Podemos decir, entonces, que la represión se descarga sobre las fracciones más empobrecidas de la clase obrera, pero también las menos institucionalizadas, las que dependen mucho más de la asistencia inmediata para asegurar algún tipo de lealtad electoral, más que política. Se trata, al parecer, del sector más conflictivo, si tomamos en cuenta los grandes enfrentamientos: el Argentinazo, la ocupación del parque Indoamericano, los saqueos y las ocupaciones de tierras. Además, a diferencia de los sectores sindicalizados, las movilizaciones suelen acudir a un enfrentamiento más abierto con el Estado, por eso la mayor violencia de éste.

en términos sucintos podemos decir que la diferencia entre la primera y la segunda se ubica en los obreros explotados por capitales que operan por encima de la productividad media (clase obrera ocupada) y los que lo hacen por debajo o trabajadores desocupados por fuera de la infantería ligera del capital o de la desocupación intermitente. Se manifiesta fenoménicamente en ese complejo mundo de desocupados, trabajadores no registrados, precarizados y receptores de planes de asistencia estatal. Esta sobreploblación relativa vende su fuerza de trabajo por debajo de su valor (histórico y social), vive de la caridad pública o logra diferentes combinaciones de ambas (Marx, 1989; Kabat, 2010).

Veamos ahora el despliegue de la represión a ambas fracciones en el tiempo (Gráfica 6).

GRÁFICA 6
Evolución de la represión total según fracción obrera (2000-2016)



Fuente: elaboración a partir de periódicos nacionales, provinciales y partidarios.

Vemos aquí que la evolución de la represión a la clase obrera ocupada muestra una línea en un leve y progresivo ascenso y los ciclos son menos pronunciados. En ningún caso superan a la represión a la sobrepoblación relativa (sólo en 2004). No obstante, durante el ciclo de baja intensidad (2003-2007), las magnitudes de ambos se acercan. Eso se debe no tanto al ascenso de la represión a la clase obrera ocupada, sino al descenso de su contraparte.

En el caso de la sobrepoblación relativa, lo que vemos es que su línea es la más representativa del ciclo general de la Gráfica 1 y se debe, ciertamente, a que es la que marca la tendencia, como la represión estatal.

La represión a la sobrepoblación relativa no sólo se destaca por su cantidad, sino por su intensidad. De los 96 asesinatos, 94 corresponden a esta fracción y sólo en dos: el docente Carlos Fuentealba, en Neuquén, y Mariano Ferreyra (un militante trotskista que prestaba apoyo a los obreros precarizados del ferrocarril) puede llegar a discutirse su pertenencia a la fracción ocupada, ya sea por su propia condición de docente (Fuentealba) o, indirectamente, por pertenecer a una familia obrera ocupada (Ferreyra). Aunque el segundo caso es muy problemático, porque de hecho el objetivo de esa represión era impedir el reclamo de obreros que componían la sobrepoblación relativa. En ese sentido, la distancia en profundidad es mayor a la distancia en cantidad.

Una pregunta importante es por qué sube la represión a la clase obrera a partir de la crisis de 2008. Una explicación posible es el retorno de la crisis económica, en un

país demasiado atado a la coyuntura económica mundial. Argentina, históricamente, ve expandirse la brecha de productividad y producto bruto interno (PBI) con los países centrales. Esa brecha fue compensada, desde 2003 hasta 2008, por la renta agraria proveniente del alza de los *commodities* (Sartelli, 2006). Así, Argentina se benefició del crecimiento del mercado de materias primas, lo que afectó también a Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia (Svampa y Slipak, 2015). No obstante, el estallido de otro espasmo de la crisis mundial, en 2008 (esta vez liderada por la quiebra de las hipotecas *subprime*), provoca el lento declive de los precios de las *commodities* a los niveles de los últimos 30 años (Ocampo, 2009; Seiffer, Kornblihtt y De Luca, 2012).

Por lo tanto en Argentina, en 2008, junto con la renta agraria, se da una ventaja muy momentánea, que era la baja de costos laborales por efecto de la acelerada devaluación de 2002 (para 2010, Argentina tenía costos 20% superiores a Brasil, 51% con respecto a México y 86% en relación con China). También, en ese año, se fue agotando la renta agraria como fuente de compensación y la crisis por las retenciones se resolvió en contra del gobierno. A eso, se suma un creciente déficit energético, por lo que el país debe importar energía, lo que requiere de una sangría de dólares. En ese escenario, 2010 y 2011 se revelaron como verdaderos oasis, producto de elementos económicos coyunturales (estatización de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES) y políticos (Bicentenario, muerte de Néstor Kirchner). Pero la segunda presidencia requería enfrentar estos problemas.

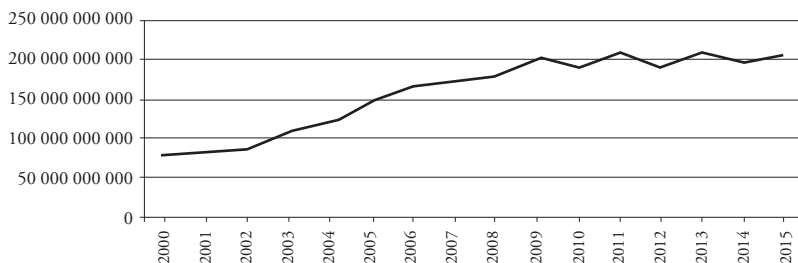
Consciente de las tareas a realizar, en su discurso de asunción, Cristina reveló que, desde ahora, iban a trabajar sobre la “sintonía fina” que, a todas luces, se describía como un ajuste en los salarios: para ello se creó una serie de dispositivos para bajar los costos salariales. En primer lugar, la firma de paritarias por debajo de la inflación. El gobierno se manejaba con la inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) intervenido. Es decir, con una ficción. El Ministerio de Trabajo se negó sistemáticamente a homologar acuerdos por debajo de la pauta puesta por el gobierno que rondaba en 10% por debajo de los aumentos de precios. El resultado fue una abrupta pérdida salarial en estos años (Kabat *et al.*, 2012; Cybulski, 2014).

Hubo una segunda medida para evitar el aumento del costo salarial: la imposición del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría y la disminución de asignaciones familiares. Lo primero se trata de la no actualización del impuesto según inflación y aumentos salariales, por lo que salarios de \$5 200 (para solteros) y \$7 997 para casados debían pagar la alícuota. Estamos hablando de sueldos que, en ese momento, apenas rozaban el costo de vida. Este impuesto, antes que una medida de recaudación fiscal (ya que importaba 2% de la misma y 0.7% del PBI), operaba más bien como un freno al aumento salarial.

El otro ajuste fue el fiscal. Al retraso de los sueldos estatales (básicamente, docentes) se le suman los recortes a las transferencias provinciales, a la educación (principalmente, en la Provincia de Buenos Aires), a las universidades y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) (que desató un conflicto importante a fines de 2011).

Pero había más, porque el agujero era suficientemente importante y la fuga de dólares, incontenible. El núcleo del déficit estaba en los subsidios a las tarifas. Por eso, en 2014, el gobierno decide una significativa quita de subsidios, que redunda en el aumento de las tarifas. En el gas, de entre 100 y 284% y en agua, de 270 a 406%.⁹ En 2014, los transportes aumentan 100%. Este cuadro, ciertamente, provoca un mayor descontento y, lógicamente, un escenario más conflictivo. A eso se agrega una menor asistencia a la sobrepoblación relativa, una fracción que se mostró como la más dinámica y combativa en el ciclo que lleva al 2001. Veamos, a continuación, la suma total de gastos estatales destinados a esta fracción obrera.

GRÁFICA 7
Suma total de gasto destinado a sobrepoblación relativa



Fuente: elaboración con información del Ministerio de Hacienda de la Nación e Índice de Precios de San Luis.

En la Gráfica 7 podemos observar un importante ascenso del gasto hacia la sobrepoblación relativa de 2002 a 2008. A partir de ese año, el gasto comienza a estancarse y no sube, por lo menos hasta el final del mandato kirchnerista. No sería exagerado vincular la represión con una menor capacidad de contener a esa población por la vía del gasto. De hecho, y como dijimos, los grandes enfrentamientos, en

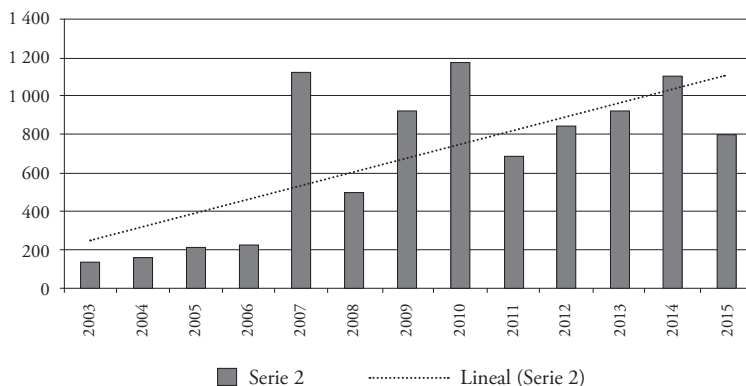
⁹ [<http://www.ambito.com/734364-gobierno-recorta-subsidios-subira-hasta-400-el-agua-y-280-el-gas>] [<http://www.lanacion.com.ar/1678784-quita-de-subsidios-el-gobierno-oficializo-las-nuevas-tarifas-para-el-gas>].

cuanto a magnitud y extensión, se dieron en esos años (2009-2013), y tuvieron como protagonista a esta fracción buscando resolver problemas elementales de la reproducción vital por la vía de la acción directa, de la misma forma que el proceso inflacionario y los ataques a la población obrera ocupada (impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, cepo cambiario, techo a las paritarias) produjo un alejamiento de los sectores sindicalizados.

Decimos que la crisis es una explicación posible, porque no necesariamente es la única. Una crisis económica no se traduce automáticamente en mayor conflictividad, y menos aún, en una mayor represión. La conflictividad no depende solamente del grado de degradación de las condiciones de la población, sino de la conciencia y capacidad de organización de ésta. Si no, deberíamos encontrar grandes luchas y grandes movilizaciones en los países más pauperizados y menos en los de mayor acumulación.

Ahora bien, una crisis fiscal, como la que atraviesa Argentina, podría considerarse un factor de peso dadas las condiciones políticas en las que se encuentra, luego del proceso de 2001. Veamos cómo evoluciona el cuadro de movilizaciones totales.

GRÁFICA 8
Cantidad de movilizaciones obreras (2003-2015)



Fuente: elaboración a partir de periódicos nacionales de izquierda y Clacso.

Efectivamente, la Gráfica 8 nos muestra un ascenso importante de movilizaciones totales a partir de 2009 (con la excepción de 2007) y una tendencia alcista, que acompaña la tendencia represiva. Es evidente que podemos situar una relación entre la crisis, la menor capacidad de contención estatal, la movilización y la mayor necesidad de represión estatal y paraestatal.

CONCLUSIONES

La reconstrucción de los hechos de represión estatal y paraestatal sobre la clase obrera arroja una serie de elementos valiosos para el examen de la evolución política de la Argentina reciente. En primer lugar, y más allá de las grandes diferencias discursivas en torno al respeto a la manifestación y a los derechos de los más postergados, no se observa una ruptura en el accionar estatal frente al conflicto social. En segundo, hay una tendencia al crecimiento de esa represión sobre la acción colectiva de la población obrera. En esa tendencia, los gobiernos kirchneristas no operaron como una contratendencia, sino que acentuaron esa dinámica, legando al gobierno de Cambiemos una vara aún más alta de la que recibieron. Por lo tanto, detrás de las diferencias entre los gobiernos llamados “neoliberales” y los progresistas (que las hay) se observa una constante: el enfrentamiento con la clase obrera. En ese sentido es que se puede hablar de verdaderas políticas de Estado y eficacia de las instituciones, que no se reducen al espacio legislativo o judicial.

En tercero, vemos que el sistema político argentino requiere, para su reproducción, de dosis crecientes de uso de la fuerza contra la población. Es decir, el orden legítimo no se garantiza por la vía privilegiada del consenso. Ello puede ser un síntoma difícilmente objetable de la continuidad de la crisis política y social, que los gobiernos kirchneristas no lograron cerrar. En ese sentido, la democracia y la construcción de la ciudadanía muestran su incapacidad para contener demandas en forma relativamente pacífica y garantizar la integridad física de los manifestantes. Podría suponerse que esta situación repercute en una menor calidad ciudadana (Leiras, 2013). Sin embargo, y para sugerir un debate urgente para los científicos políticos, tal vez la noción misma de ciudadanía implique el apego a un corpus normativo que no siempre contempla las necesidades de la mayoría de la población ni se preocupa por sus soluciones. Con lo cual, mayor ciudadanía no implica mayor calidad de vida.

En cuarto, la aparición de un fenómeno en crecimiento, pero poco estudiado hasta el momento: el desarrollo de fuerzas irregulares de represión paraestatal. Grupos de choque armados formados episódicamente (se convocan con un fin específico y luego

se disuelven) y compuesto por diversos personajes en los que se cruzan el mundo del delito, del fútbol (“barrasbravas”), del sindicalismo, del municipio, de los barrios carenciados (“villas”) y de las dirigencias políticas (Fernández, 2004; Grabia, 2011). Se trata de elementos que, aun por fuera del Estado, responden al mismo. En esta década, la política argentina, lejos de desterrarlos, los incrementó peligrosamente.

Por lo tanto, habría que revisar seriamente las hipótesis reseñadas arriba. Por un lado, las que tienden a ver en el periodo (y en la actualidad) el enfrentamiento entre una alianza “popular y democrática” y otra “conservadora”, ya que tanto una como otras enfrentan violentamente a las manifestaciones de la clase obrera. Ambas, en defensa de sistema social vigente. No es posible señalar tajantemente la existencia de una “alianza popular” toda vez que una parte (la más fuerte) de esa alianza se lanza al ataque físico contra los sectores más desposeídos.

Asimismo, la evidencia trabajada aquí le quita gran parte de su operatividad a las hipótesis liberales que señalan el poco apego a las normas formales de los gobiernos “populistas”, toda vez que estamos ante un régimen que ha procurado hacer cumplir las leyes con la fuerza del Estado.

En definitiva, los debates sobre las rupturas progresistas de los gobiernos pasados y las conservadoras del actual deberían integrar necesariamente estos puntos de continuidad, misma que parece definir un horizonte de clase: la permanencia de una clase social en el poder (la burguesía argentina), cuyo personal político defiende un régimen social (el capitalismo) frente a las acciones de la clase obrera (Sartelli, 2017). La cuestión de clase, en ese sentido, cobra una nueva importancia explicativa. Para entender mejor los procesos, tal vez haya llegado el momento de desempolvar las discusiones sobre la naturaleza de clase del Estado. Debates que se creían ya superados, pero que la propia realidad se encarga de volver a traer.

BIBLIOGRAFÍA

- Botana, Natalio (2006). *Poder y hegemonía. El régimen político después de la crisis*. Buenos Aires: Emecé.
- Carrera, Inigo, Nicolás y María Celia Cotarelo (2003). “La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización”, *Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (Pimsa). Documentos y comunicaciones*, pp. 201-308.
- Cotarelo, María Celia (2016). *Argentina (1993-2010). El proceso de formación de una fuerza social*. Buenos Aires: Imago Mundi.

- Cybulski, V.R. (2014). “Las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo en América Latina bajo gobiernos ‘progresistas’”, *Razón y Revolución*, núm. 27.
- Fernández, Federico (2004). “Fútbol, relaciones asimétricas y poder: los vínculos entre dirigentes, referentes políticos y barras brava”, *Revista de Ciencias Sociales*, núm. 14.
- González, Horacio (2011). *Kirchnerismo: una controversia cultural*. Buenos Aires: Ediciones Colihue.
- Grabia, Gustavo (2011). *La 12. La verdadera historia de la barra de Boca*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Kabat, Marina (2010). “La sobrepoblación relativa. El aspecto menos conocido de la concepción marxista de la clase obrera”, *Anuario CEICS 2009*, Ediciones ryr.
- *et al.* (2012). “La flexibilidad laboral en la historia: una mirada de largo plazo de la ofensiva sobre las condiciones de trabajo 1954-2012”, *VII Jornadas de Sociología* de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2012, La Plata, Argentina. Argentina en el escenario latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología.
- Laclau, Ernesto (2005). *La razón populista*. Bernal: Fondo de Cultura Económica.
- Leiras, Santiago (comp.) (2013). *Democracia y Estado de excepción. Argentina 1983-2008*. Buenos Aires: Prometeo.
- Marx, Karl (1989). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse), 1857-1858*. Mexico: Siglo XXI Editores.
- [1851] (1996). *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*. Buenos Aires: Losada.
- Novaro, Marcos, Alejandro Bonvecchi y Nicolás Cherny (2014). *Los límites de la voluntad. Los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner*. Buenos Aires: Ariel.
- Ocampo, José A. (2009). “Impactos de la crisis financiera mundial sobre América Latina”, *Revista de la CEPAL*, núm. 97.
- Pucciarelli, Alfredo y Ana Castellani (coord.) (2017). *Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Sartelli, Eduardo (2006). *La plaza es nuestra*. Buenos Aires: Ediciones ryr.
- (2017). “El origen del ‘relato’. La ideología bonapartista del kirchnerismo como emergencia de un momento de la vida social argentina”, en Eduardo Sartelli y Marina Kabat (coords.), *Mentiras verdaderas. Ideología, nacionalismo y represión en la Argentina. 1916-2015*, Colección Libros de Cátedra. Buenos Aires: OPFyL, Universidad de Buenos Aires.
- Seiffer, Tamara, Juan Kornblihtt y Romina De Luca (2012). “El gasto social como contención de la población obrera sobrante durante el kirchnerismo y el chavismo (2003-2010)”, *Cuadernos de Trabajo Social*, 25(1), pp. 33-47.
- Zicolillo, Jorge (2013). *La era de dos culatas. La derecha peronista y el patoterismo sindical*. Buenos Aires: Vergara.
- Zorzoli, Luciana (2014). “Para pensar las prácticas sindicales. Una lectura de la sentencia por el asesinato de Mariano Ferreyra”, *Conflicto Social*, 7(11), pp. 31-66.
- Svampa, Maristella y A.M. Slipak (2015). “China en América Latina: Del Consenso de los Commodities al Consenso de Beijing”, *Revista Ensamblés*, núm. 3.

Diarios: *Clarín, La Nación, Página/12, Infobae, La Voz del Interior, La Gaceta, El tribuno, La Mañana de Neuquén.*

Periódicos de izquierda: *Prensa Obrera, La Verdad Obrera, Hoy, Alternativa Socialista, El Socialista.*

Sitios: Indimedia.

Boletines: CELS, Correpi.

Entrevistas: Rubén Sobrero (secretario de la Unión Ferroviaria, Seccional Haedo), Pablo Eybucic (delegado telefónico), Víctor Grossi (secretario general de Sitraic, construcción), Andrés Machuca (secretario de Cultura de SUTEBBA-Matanza, gremio docente), Nicolás Fernández Casas (delegado de Mercedes Benz).